

# AGRICULTURA FAMILIAR EN ARGENTINA: INNOVACIÓN INSTITUCIONAL EN EL INTA

*José Catalano<sup>1</sup>*  
*Luis Mosse<sup>2</sup>*  
*Andrea Maggio<sup>3</sup>*

## RESUMEN

La política pública para el sector rural es interpelada en razón de múltiples conflictos e intereses contrapuestos, y su sentido último, así como su sostenibilidad en el tiempo, depende en gran medida del contexto social y político. En Argentina, el período abierto luego de la crisis de 2001-2002 planteó el desafío de construir un modelo de desarrollo con inclusión que recupere el trabajo como factor socializador y el territorio como ámbito privilegiado de intervención. En este sentido, las políticas públicas dirigidas a lo rural debieron dar cuenta de los cambios ocurridos en el contexto social y político, lo que condujo no sólo a recuperar ciertos instrumentos públicos de intervención –abandonados durante el auge de las políticas neoliberales–, sino a reflexionar sobre estas herramientas, para adecuarlas a los desafíos actuales. El presente trabajo toma el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para analizar las nuevas formas de intervención en investigación y extensión rural, implementadas por el Estado argentino en los últimos años.

**Términos para indexación:** desarrollo rural, extensión-investigación, Gobierno, organizaciones.

## FAMILY FARMING IN ARGENTINA: INSTITUTIONAL INNOVATION IN THE NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY (INTA)

## ABSTRACT

Public policy for the rural sector is questioned because of many conflicts and interests, and its ultimate meaning, as well as its sustainability over time, largely depends on the social and

---

<sup>1</sup> Ing. Agrónomo, Mg. en Desarrollo Rural, Vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Av. Rivadavia 1439, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1098. catalano.jose@inta.gob.ar

<sup>2</sup> Becario de investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar - INTA - Chile 460 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1033. mosse.luis@inta.gob.ar

<sup>3</sup> Ing. Agrónoma, Directora del Centro de Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar - INTA - Chile 460 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1033. maggio.andrea@inta.gob.ar

political context. In Argentina, the period immediately after the crisis of 2001-2002 posed the challenge of creating a development model with social inclusion that recovers work as a socializing factor, and the territory as a privileged area of intervention. In this sense, public policies addressed to the rural sector had to account for changes that occurred in the social and political context, which led not only to recover certain tools of state intervention – which were abandoned during the rise of the neoliberal policies –, but to reflect on these tools to adapt them to current challenges. This paper studied the case of the National Agricultural Technology Institute, in order to analyze the new ways of intervention in rural research and extension, implemented by the Argentinian government in recent years.

**Index terms:** rural development, research & extension, government, organizations.

## INTRODUCCIÓN

Desde los primeros años del siglo XXI, tras las movilizaciones sociales ocurridas en numerosos países de la región y el posterior establecimiento de gobiernos democráticos surgidos en contraposición con el período neoliberal, se instaló en el continente el desafío de construir un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible socialmente, donde el trabajo opere como el principal articulador social.

La intervención pública expresa la voluntad política de generar cambios que orienten el modelo de desarrollo hacia la satisfacción de las necesidades de las mayorías. La política pública funciona como vector en la construcción de este modelo. Por ello, la restitución de un rol activo del Estado, en las sociedades y economías modernas, fue una constante en aquellos gobiernos que plantearon una salida neodesarrollista a la crisis (BRESSER-PEREIRA, 2007).

En el caso de la política de desarrollo rural, la introducción del concepto de agricultura familiar (en adelante AF) expresa la forma que toma la intervención en el proceso de constitución de este modelo de desarrollo. Este concepto recontextualiza el debate, en Latinoamérica, en torno a la persistencia de formas no capitalistas de producción rural –como lo expresa la tradición de estudios sobre el campesinado (PAZ, 2006; WOLF, 1977), y aquellas que analizan la existencia o no en América Latina de figuras tales como el *farmer* (ARCHETTI; STÖLEN, 1975)–, bajo formas novedosas que intentan dar respuesta a los desafíos actuales.

En este sentido, cabe preguntarse cuáles son las respuestas gestadas desde la función pública y qué lugar ocupa el concepto de AF en ellas. Partimos de que el concepto es multifacético, y en cuanto al lugar que ocupa, se consideran diversos elementos: una caracterización del contexto actual del sector; una dimensión estratégica que proyecta la función que el sector de la AF debe cumplir en el marco de una estrategia de desarrollo nacional; un posicionamiento político respecto a los caminos posibles que expresan intereses contrapuestos; y la recuperación de una tradición histórica.

El objetivo del presente artículo fue analizar los aspectos más novedosos de la intervención pública para el desarrollo del sector de la AF en el último decenio. Para ello, describiremos, en primer lugar, el contexto en el cual se adoptó y divulgó el concepto de AF en el país. Luego analizaremos cambios institucionales en el Estado, que introducen innovaciones propicias para el trabajo con el sector, detallándolos en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A modo de cierre, señalaremos algunos desafíos de la política pública.

## LA EMERGENCIA DEL CONCEPTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y SU INTRODUCCIÓN EN ARGENTINA

Hasta la década de 1990, el concepto de AF era poco utilizado en la región. Las nociones más comunes, construidas desde la academia y las instituciones públicas dedicadas al desarrollo, generaron distintas herramientas para el análisis de la ruralidad. Para los primeros, la figura del campesino y, con ello, la idea de una economía campesina distinta cualitativamente a la economía capitalista, ocupan un lugar central. A modo de ejemplo, Ricardo Abramovay recrea el debate mediante el recurso de contraponer dos textos, sumamente influyentes en la temática, que representan posiciones contrapuestas: la defendida por Kautsky, que plantea la lenta pero inevitable desaparición de la economía campesina, debido a la progresiva penetración en ella de las relaciones capitalistas de producción (KAUTSKI, 2002); y la defendida por Chayanov, quien desarrolla la hipótesis sobre la irreductibilidad de las unidades campesinas, las cuales serían no sólo capaces de reproducirse y sostenerse sino que, bajo determinado contexto, son más eficaces que la empresa capitalista agraria (CHAYANOV, 1974). Esta discusión permanece y

anima las diferentes posiciones que se asumen en el debate sobre la ruralidad en el siglo XX (ABRAMOVAY, 2007).

Desde los organismos gubernamentales en cambio, se desarrollaron conceptos que permiten la operacionalización de las variables, para así poder distinguir grupos pasibles de ser sujetos de las políticas públicas. La definición de estos distintos sujetos dependerá de su relación con diferentes dimensiones que son: el nivel de ingresos (ingresos bajos/medios/altos); grado de capitalización o tamaño de la empresa (pequeño/mediano/gran productor); posesión de la tierra (latifundista/minifundista); tipo de tenencia y uso de la tierra (propietario/arrendatario/mediero); organización social de la producción (colono/chacarero/cooperativista); tipo de producción (pequeños agricultores, horticultores, ganaderos trashumantes, pescadores artesanales); relación con el mercado (productores integrados o no integrados); modos de reproducción (productores de subsistencia, de reproducción simple o ampliada) (BASCO, 1978; FORNI, 1994; MURMIS, 1991; SOVERNA et al., 2008).

Entre el paradigma marxista, expresado por Kautsky, y el énfasis de Chayanov en la morfología propia de la economía campesina, se genera un campo híbrido propicio para dar lugar a mixturas que alimentan la producción intelectual sobre la temática. En palabras de Abramovay,

[...] la estructura social de la agricultura contemporánea de los países capitalistas centrales tiene como base una forma social que, sin corresponder a la polarización prevista por los clásicos marxistas de la cuestión agraria, no posee tampoco los rasgos básicos de aquello que se puede llamar campesinado (ABRAMOVAY, 2007, p. 50).

Fue a partir de mediados de los años 80 del siglo XX que el concepto de AF se introdució y divulgó, específicamente en América Latina, influenciado por formas de producción social propias de otras zonas como Estados Unidos y Europa (NEVES, 2007). En estas formulaciones, la existencia de la agricultura familiar se define por oposición a la agricultura empresarial, es decir, encarna en su misma diversidad, prácticas y formas de vida que difieren de los sectores hegemónicos de la actividad agropecuaria.

Esto implica aclarar que, si bien sea necesario remontar los diferentes orígenes sociológicos que lo componen, la naturaleza del concepto de AF es política, ya que su fin es visibilizar y fortalecer un conjunto diverso de sujetos históricamente vulnerados, cuya capacidad de reproducción y agregación de

intereses se encuentran limitados por las asimetrías propias del desarrollo histórico, observado en los sistemas agroalimentarios y agroindustriales de la región. Entendiéndolo como un campo simbólico, donde se concentran las demandas de los productores y sus organizaciones, las instituciones públicas de desarrollo rural y los intelectuales vinculados a la temática, la agricultura familiar adquiere unicidad en función del objetivo de construir un colectivo dotado de derechos, y su fortalecimiento repercute positivamente en el conjunto de la población, entendiéndose que es constitutivo de la soberanía de los Estados nacionales.

En Argentina, la introducción y socialización del término Agricultura Familiar se da en el marco de la salida de la crisis de 2001-2002, concomitantemente con otros sectores sociales que van tomando lugar en la agenda pública de los gobiernos, con activa participación de los movimientos sociales, en contracara de lo sucedido en plena hegemonía de ideas neoliberales.

Se enmarca en un proceso de crecimiento y modernización del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial (SAA) que cobró relevancia en los años 90, impulsado por la adopción del paquete tecnológico (siembra directa, semillas genéticamente modificadas y agroquímicos), la suba de los precios de los *commodities* en el mercado global, y la devaluación en el año 2002 que impuso un tipo de cambio favorable para los bienes transables en el exterior (ELVERDIN et al., 2008). Al mismo tiempo, Argentina cambia el rumbo en materia de relaciones exteriores, al replantear los posicionamientos automáticos respecto a las prerrogativas de los organismos multilaterales de crédito y de los Estados centrales; como así también, su participación es relevante en el rechazo al ALCA en 2004, la creación de la Unasur, y el fortalecimiento del Mercosur, entre otras medidas.

El grado de integración que el SAA tiene en los mercados mundiales transmite las transformaciones de manera relativamente rápida, al tiempo que el rol estratégico que la producción agropecuaria tiene para la estructura económica del país, como importador de divisas, lo convierte en un campo de disputas constantes a lo largo de la historia del país.

Fue necesario fortalecer las capacidades institucionales, para incorporar a la AF como actor social y económico relevante en el SAA. El caso del INTA es sintomático de este proceso: a punto de ser privatizado en 1996/97, inició un camino de recuperación de capacidades tanto en investigación como en

extensión; esto se da en el marco de las políticas tendientes a reconstruir el sistema científico-tecnológico nacional.

### **Caracterización de la agricultura familiar en Argentina**

Pequeños productores agropecuarios, colonos, chacareros, huerteros, campesinos, medieros, pescadores artesanales y minifundistas son algunas de las figuras típicas con que se relaciona la agricultura familiar en Argentina; el sentido del término se extiende hacia todas las formas de producción agropecuaria que tienen a la familia como principal aportante de mano de obra y gestión de la unidad productiva. Se entiende por Agricultura Familiar un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la producción, que se dirige tanto al autoconsumo como al mercado (ECHENIQUE, 2000).

Bajo estos criterios, este sector representa en Argentina el 65% de las explotaciones agropecuarias totales, llegando a representar en la región noroeste del país a cerca del 80% de las unidades productivas (RAMILO; PRIVIDERA, 2013).

Es, además, el sector que aporta el 55% de la mano de obra rural, lo que muestra la capacidad para generar fuentes de trabajo genuino. La importancia del sector se acrecienta, si consideramos el aporte a producciones claves para las economías regionales, como la yerba mate, algodón, tabaco, mandioca, azúcar, vid, frutales, hortalizas, entre otras (OBSCHATKO et al., 2007). Algunos datos referidos al aporte al valor de producción los podemos ver en la Tabla 1. Estos aspectos, sumados a la territorialidad de la AF, pasan a ser elementos centrales en una estrategia soberana y federal que contemple el desarrollo de las economías regionales.

Como mencionamos más arriba, existen datos disponibles en Argentina que permiten dar cuenta de la centralización en la actividad en el sector. Entre los años 1988 y 2002, desaparecieron en todo el país más de 80 mil explotaciones; se trata en su mayoría de productores con menos de 200 ha, lo que implicó un aumento en el promedio del tamaño de la superficie explotada (que pasa de 425 a 524 ha) durante el período.

**Tabla 1.** Participación de Pequeños Productores en el Valor Bruto de Producción / Provincias

Provincia	VBP (Millones \$)	%PP / Total EAP
Misiones	569	47,2
Formosa	114	42,6
Catamarca	244	40,7
Chaco	339	33,4
Entre Ríos	1.102	27,8
Santiago del Estero	344	25,9
Santa Fe	2.263	25,6
Chubut	36	23,9
La Rioja	85	23,9
Jujuy	158	23,2
Neuquén	68	21
Tucumán	324	19
Rio Negro	252	17,4
Mendoza	601	17
Córdoba	1.881	15,2
San Juan	142	15,1
Buenos Aires	2.437	14,8
Corrientes	271	14,8
La Pampa	382	14,3
Salta	126	11,1
San Luis	52	9,2
Santa Cruz	3	5,6
Tierra del Fuego	1	2,8
Total País	11.797	19,2

## PROBLEMAS Y DESAFÍOS ACTUALES PARA LAS INSTITUCIONES DE DESARROLLO RURAL

Algunas de las consecuencias negativas de esta evolución del SAA son especialmente relevantes, para plantearlas como desafíos, que pueden poner en valor el aporte que realizan los distintos sujetos que forman la Agricultura Familiar en Argentina.

Por un lado, en el caso de la **seguridad y soberanía alimentaria**, es imposible olvidar el alcance que la desnutrición y malnutrición tuvieron en

nuestro país, durante el apogeo de la crisis económica debida principalmente al desempleo y los bajos ingresos y, posteriormente, a la suba de precios de los alimentos, como efecto inflacionario de los precios internacionales de los productos exportados por Argentina. Por otro lado, la concentración de la producción tiene su correlato en la distribución de los alimentos: el “supermercadismo” –neologismo mediante el cual se conoce la concentración de las bocas de expendio (retail), en manos de unas pocas y grandes cadenas multinacionales de supermercados–, impone condiciones netamente excluyentes para los productores familiares y aumenta excesivamente los costos de los alimentos, perjudicando a los otros eslabones de la cadena (ABLIN, 2012). Tras la crisis económica global iniciada en 2009, la problemática mundial de acceso a los alimentos se vio agravada por las dos siguientes cuestiones: el avance del monocultivo sobre otras producciones conduce a la pérdida de diversidad; se suma también el fomento a la producción de biocombustibles, lo que provoca la dicotomía conocida como producir para comer/producir para carburar. Las aristas más acuciantes de la problemática fueron superadas de la mano de la recuperación económica, la creación de fuentes de trabajo, la articulación de planes y programas de seguridad alimentaria, y la asignación universal por hijo. Además, la AF también toma carácter urbano y periurbano en los intersticios de las ciudades y, progresivamente, aumenta su capacidad de oferta de alimentos frescos a la población urbana.

Otro aspecto se refiere al **ordenamiento territorial**. Si bien la dinámica de los territorios es sumamente compleja y no tiene un sentido unívoco y preciso, existen datos que permiten dar cuenta de ciertas externalidades negativas relacionadas con la dinámica del SAA. La exclusión de las familias rurales y la consecuente concentración poblacional en las grandes ciudades son un fenómeno global, lo que invita a pensar estrategias de desconcentración a partir de la valorización de los territorios locales. En Argentina, los datos disponibles dan cuenta de este fenómeno, como podemos ver en la Tabla 2. Un estudio más reciente del INDEC proyecta que la provincia de Buenos Aires va a tener más de 20 millones de habitantes, la gran mayoría ubicada en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que representará, sumados los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca del 44% de la población total del país para el año 2040 (INDEC, 2013).

Tras este fenómeno opera un conjunto de desigualdades regionales de distintos tipos (económicas, sociales, culturales). Este fenómeno de migración

**Tabla 2.** Partidos<sup>(1)</sup> seleccionados de la Provincia de Buenos Aires. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por partido: años 2001-2010.

Partido	Población		Variación absoluta	Variación relativa (%)
	2001	2010		
Cañuelas	42.575	51.892	9.317	21,9
Coronel Dorrego	16.522	15.825	-697	-4,2
Coronel Pringles	23.794	22.933	-861	-3,6
Esteban Echeverría	243.974	300.959	56.985	23,4
Exaltación de la Cruz	24.167	29.805	5.638	23,3
Ezeiza	118.807	163.722	44.915	37,8
Florencio Varela	348.970	426.005	77.035	22,1
General La Madrid	10.984	10.783	-201	-1,8
General Lavalle	3.063	3.700	637	20,8
General Rodríguez	67.931	87.185	19.254	28,3
La Matanza	1.255.288	1.775.816	520.528	41,5
Marcos Paz	43.400	54.181	10.781	24,8
Monte	17.488	21.034	3.546	20,3
Pellegrini	6.030	5.887	-143	-2,4
Pilar	232.463	299.077	66.614	28,7
Pinamar	20.666	25.728	5.062	24,5
Presidente Perón	60.191	81.141	20.950	34,8
Puán	16.381	15.743	-638	-3,9
Salliqueló	8.682	8.644	-38	-0,4
San Vicente	44.529	59.478	14.949	33,6
Tigre	301.223	376.381	75.158	25,0
Tres Arroyos	57.244	57.110	-134	-0,2
Vicente López	274.082	269.420	-4.662	-1,7
Villa Gesell	24.282	31.730	7.448	30,7

<sup>(1)</sup> Distrito o territorio de una jurisdicción o administración que tiene por cabeza un pueblo principal.

Fuente: Indec (2011).

campo-ciudad contribuye entre otros a la generación de los bolsones de pobreza, hacinados en las periferias de las grandes urbes, al mismo tiempo que desaparecen pueblos y ciudades del interior. La insostenibilidad de las grandes urbes se expresa en el colapso de los servicios públicos, el desempleo crónico y la precariedad del hábitat. El sector de la AF es por definición aquel que vive directamente en el campo o bien en ciudades y localidades aledañas al lugar de producción; es también el principal generador de empleo rural y

periurbano, por lo tanto asegura el arraigo de las familias en los pueblos, y sus producciones son dinamizadoras de las economías regionales (ROFMAN, 2012).

La cuestión de la **sostenibilidad ambiental** debe abordarse desde múltiples dimensiones. El calentamiento global es quizás la expresión más alarmante de la crisis ambiental, frente a la cual es difícil pensar en soluciones parciales que no afecten las estructuras profundas del modelo de acumulación imperante. El desafío ambiental es, por definición, global, por lo que las posibles respuestas deben ser también globales, incluyendo a todos los Estados y organismos supranacionales (HOLLMANN et al., 2013).

Como mencionamos en relación a la ocupación territorial, los agricultores familiares habitan los territorios más sensibles desde el punto de vista ambiental. Además, una característica de la producción familiar es la diversidad de las actividades productivas; ante el avance del monocultivo inherente a la agricultura empresarial, se constituye como un aliado clave en el territorio para preservar y promover la biodiversidad. No obstante, en el marco de políticas públicas hay una tendencia a la reducción de insumos químicos y, si bien la producción familiar no es *per se* más amigable con el medio ambiente, es posible de adoptar enfoques productivos agroecológicos, dada la escala de las unidades productivas y el uso más intensivo de mano de obra.

Estos desafíos/problemas destacados, entre otros, dan cuenta de la necesidad no sólo de construir políticas públicas sólidas de la mano de un Estado presente, sino también de la necesidad de repensar las formas de intervención. En lo que sigue, describiremos algunas políticas puestas en marcha para avanzar en la resolución de esos desafíos en Argentina, con énfasis en innovaciones institucionales en el INTA.

## INNOVACIONES INSTITUCIONALES PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA ARGENTINA

Un aspecto común de la institucionalidad, impulsada desde los primeros años del siglo XXI para la AF, es la generación de competencias desde el Estado, estrechamente vinculadas con el fortalecimiento de las organizaciones de productores en el territorio. Implica primordialmente que la sociedad civil

se incorpore desde un primer momento y sea genuinamente representada. Se trata de una ida y vuelta que buscan generar instancias que fortalezcan a las organizaciones, prioricen el trabajo con ellas, y asuman los objetivos consensuados.

Uno de los antecedentes más importantes lo constituye la “*Unidad de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión Para Pequeños Productores*”, conocida como **Unidad de Minifundio de INTA**. Este programa, puesto en marcha durante la década de 1980, se constituyó a partir de la demanda de más de 3000 productores de las regiones del NEA y del NOA. Tuvo como objetivo central la conformación de organizaciones de diversa índole (cooperativas, consorcios, sociedades de hecho, otras); y, como herramientas, el mensaje tecnológico, la organización de los productores y la capacitación. En un principio, se desarrollaron 50 proyectos de extensión y desarrollo, a la par que se promovieron diferentes líneas de investigación y validación de tecnología para la pequeña producción, llegando a constituirse en ese periodo cerca del 10% de los planes de trabajo de la institución. Más de 87 de las cooperativas rurales que existen hoy en día fueron formadas a partir de este trabajo, en toda la geografía nacional. *La Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan* (Fecoagro), por ejemplo, fue impulsada desde un proyecto de la Unidad de “Minifundio”, aplicado desde 1988, para desarrollar el trabajo de productores de la provincia de San Juan. El primer grupo con el que se trabajó estaba integrado por trabajadores rurales expulsados de una finca. Cuando se empezó a aplicar el proyecto, las cooperativas de la zona producían principalmente semilla de cebolla, otras semillas hortícolas y aromáticas para la venta, y productos de la huerta para autoconsumo. Hoy en día, las cooperativas que componen la federación son aproximadamente 30 y agrupan a más de 500 socios, cuya producción se diversificó hasta llegar a comercializar más de 30 especies hortícolas, dulces, aromáticas, entre otros. Desde su creación, han logrado adquirir 400 ha de tierra bajo riego en propiedad, más de 70 tractores, y cuentan con la planta de semillas más importante de la provincia.

En el mismo sentido, debemos mencionar el **Programa Social Agropecuario** (PSA), nacido en 1993 en el ámbito de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. En el marco de las políticas focalizadas, destinadas a paliar las consecuencias más negativas del modelo de liberalización económico en el ámbito rural, se constituyó como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las familias a través

del trabajo con sus organizaciones, desde las propias comunidades y en sus territorios. La concepción de desarrollo rural esbozada en el programa se afirma en el respecto a los procesos culturales e históricos, las trayectorias de actuación de todos sus participantes, y la diversidad de cosmovisiones. El PSA se propuso abordar los problemas del desarrollo de manera integral. La experiencia recogida durante los años de ejecución del programa, así como las estructuras relacionadas, fueron retomadas y potenciadas en lo que hoy se constituye la Secretaría de Agricultura Familiar, que comentaremos más adelante.

Una de las primeras innovaciones entre Estado y sociedad civil dirigida al sector es la creación del **Foro Nacional de Agricultura Familiar**. En diciembre de 2004, con representantes de 1.040 organizaciones del sector, se constituyó formalmente el Foro, con la presencia de los referentes de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hoy en día, más de 900 organizaciones se constituyen en Federación Nacional de Organizaciones de la AF (FONAF), agrupadas en mesas provinciales y foros regionales, que delegan representantes a la mesa nacional. La federación intenta fomentar una herramienta de representación para un conjunto de sujetos cuyas reivindicaciones son comunes y giran en torno a la Reforma Agraria integral, políticas diferenciales para la agricultura familiar y fortalecimiento institucional de las organizaciones (FONAF, 2006).

En el ámbito propiamente estatal, la creación de la **Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar**, dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, es un hito importante que muestra el cambio de los programas de alivio a la pobreza hacia políticas de desarrollo. El marco institucional generado permite pensar la AF no como un conjunto de la población particularmente afectado, al cual es necesario contener o apoyar para paliar las consecuencias más negativas del modelo económico, sino como sujetos en el territorio capaces de llevar adelante un proceso de desarrollo integral y autónomo que, al mismo tiempo que mejora sus condiciones de vida, fortalece al conjunto de la sociedad, asegurando la soberanía nacional sobre el territorio. Actualmente esa Secretaría se desdobra en dos **Secretarías: Desarrollo Regional y Agricultura Familiar**. Desde aquí, se llevan a cabo acciones de apoyo técnico y financiero, y visibilización de las demandas de campesinos y agricultores familiares que son, entre otras cuestiones: la problemática del acceso a la tierra en Argentina, problema estructural que se expresa en forma

dramática con la cuestión de los desalojos, posesión veinteñal, titularización y extranjerización de la tierra.

Este armado institucional permitió, entre otras cosas, avanzar desde 2009 en el **Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF)**, requisito indispensable para el diseño de políticas dirigidas al sector. Al día de hoy, ReNAF tiene más de 100 mil productores registrados y permitió profundizar la caracterización de los Agricultores Familiares en cuanto a su actividad, condiciones demográficas, acceso a los recursos naturales, apoyo institucional, nivel tecnológico y acceso a los mercados.

Asimismo, la creación de la **Coordinación Nacional de Agricultura Familiar (SeNAF)**, del Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria (Senasa), opera en el mismo sentido y constituye un ámbito excepcional, para pensar la normativa adecuada a las necesidades de los productores familiares en torno a las normas de sanidad animal y vegetal en la producción, transporte y comercialización de sus productos, hasta el momento discriminatorias para la AF.

En cuanto a la integración regional, es de destacar que Argentina participa desde su creación, en Junio de 2004, en la **Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF)**, espacio donde se vinculan los organismos públicos con las organizaciones rurales del Mercosur ampliado, para generar un ámbito de debate y reflexión en torno a las problemáticas del sector. Las demandas tecnológicas consensuadas en este ámbito y retomadas por el INTA son: acceso y uso de recursos naturales (agua y tierra); energías renovables; maquinarias y tecnología apropiadas; caracterización de la AF; comercialización y financiamiento; normativas y aspectos jurídicos.

Dado que, en última instancia, los problemas que afectan al sector son complejos, un abordaje adecuado requiere incorporar el enfoque interinstitucional como principio para la coordinación de políticas públicas, lo que también fuera demanda del sector.

En este sentido, desde 2003, el Ministerio de Desarrollo Social tiene bajo su órbita el **Plan Nacional de Seguridad Alimentaria**, el cual busca brindar asistencia alimentaria acorde con las particularidades y costumbres de cada región del país, facilitar la autoproducción de alimentos y realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional. Dentro de este plan y en conjunto con el INTA está el **ProHuerta**, con 25 años de existencia,

que promueve prestaciones básicas (insumos, capacitación) para que familias y grupos generen sus propios alimentos frescos de huertas y granjas de forma orgánica. También busca que los/las productores/as participen en Ferias Francas, redes de trueque y microemprendimientos.

Además, desde el mismo Ministerio, se aplicaron instrumentos específicos como el **Monotributo Social**, que permite avanzar en la legalización de los trabajadores rurales, históricamente relegados de los beneficios del trabajo legal. Con esta herramienta, el productor accede: a la jubilación; a la atención médica; fundamentalmente, a la posibilidad de vender su producción en los diferentes niveles del estado (municipal, provincial y nacional); a la **Marca Colectiva**, que pone a disposición de los productores una herramienta accesible para comercializar sus productos; y al **Microcrédito**, herramienta financiera estatal, que permitió llevar adelante microemprendimientos de índole social. Cabe destacar que instituciones previamente vinculadas con el sector recibieron también un fuerte impulso como, por ejemplo, el **movimiento cooperativo**, ámbito natural de integración y vinculación económica para los pequeños productores. Según un trabajo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en la actualidad, existen alrededor de 800 cooperativas rurales funcionando regularmente, que nuclean alrededor de 100 mil asociados, de los cuales el 79% pertenecen a explotaciones agropecuarias familiares (OBSCHATKO et al., 2011).

Encima, desde el Ministerio de Trabajo, se potenció el **ReNATEA** como un instrumento para combatir el trabajo informal no registrado. Además, genera programas de capacitación y certificación de oficios.

En relación a la investigación y generación de conocimientos, se creó el **Foro de Universidades para la Agricultura Familiar**. Desde el año 2009 y a partir de iniciativa del INTA, se constituyeron cinco foros (uno por macrorregión), destinados a involucrar a las Universidades en la temática. Actualmente, participan 42 Universidades Nacionales, asegurando la diversidad disciplinar y, durante 2014, se realizó el primer congreso del Foro en un encuentro en la provincia de Córdoba, donde cientos de productores, estudiantes y funcionarios debatieron acerca de los principales problemas y desafíos del sector. Cabe destacar que, en gran medida gracias a experiencias como la del Foro, la temática de la AF va ganando terreno en los currículos y los programas de extensión universitaria.

Hemos mencionado algunos avances en el marco institucional argentino dirigido al desarrollo rural. En lo que sigue, profundizaremos el abordaje y desarrollo de la cuestión de la agricultura familiar en el INTA.

## REPENSAR LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN: EL INTA FRENTE AL PROCESO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Durante la época de creación del INTA (1956), la estructura social agropecuaria estaba marcada por fuertes impulsos tendientes a su modernización, tanto en términos tecnológicos como en relación a las condiciones sociales de producción, con una visión política de transformar una estructura agropecuaria caracterizada por el atraso tecnológico y la presencia de grandes latifundios. En este contexto, el Instituto desarrolla su matriz doble –de investigación y extensión rural–, cuyos objetivos principales eran mejorar la producción y productividad de la empresa agropecuaria y la calidad de vida de las familias rurales. El proceso de tecnificación del sector agropecuario fue de vital importancia para el impulso desarrollista de la época y para el objetivo de sustituir importaciones para desarrollar la industria nacional.

Durante mucho tiempo, primó un modelo educativo con un esquema de transferencia unidireccional, de “arriba hacia abajo”, y un modelo cientificista con la investigación en la frontera del conocimiento alejada de los servicios de extensión. Este esquema proponía que la investigación de base debía generar los conocimientos y la tecnología adecuada, para impulsar la modernización de un sector visto como atrasado, mientras que el sistema de extensión rural, con una cobertura amplia a lo largo y ancho del país, debía encargarse de transferir a las unidades productivas dicha tecnología (ALEMANY, 2003).

Hemos mencionado arriba que, durante la vorágine privatista de los años 1990, el INTA estuvo al borde de su desaparición en tanto institución pública, teniendo que operar sin financiamiento, infraestructura y con una planta de menos de 3500 empleados, para cubrir la totalidad del territorio nacional. Desde 2003, se recompuso la ley de financiamiento del Instituto, en reconocimiento a su importancia en términos de investigación y extensión. Hoy en día, la institución tiene presencia en las cinco macrorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros regionales, 6 centros

de investigación, 50 estaciones experimentales, 16 institutos, más de 300 Unidades de Extensión. Cuenta con más de 7000 empleados, entre técnicos e investigadores. El sistema de extensión pasó a ocupar un lugar preponderante, como parte de las políticas públicas para promover el desarrollo competitivo, sustentable y equitativo. Se valora, reconoce la fortaleza, se potencia contar con investigación y extensión en la misma institución, y se propone la interacción entre ambas áreas en la gestión de la innovación.

Junto a ello, la institución ha asumido trabajar fuertemente, desde la óptica del **Desarrollo Territorial**, para lograr junto a los actores construir un modelo de desarrollo con inclusión social, por el cual la innovación tecnológica y organizacional fortalezcan la competitividad y la equidad social. En este sentido, el rol ineludible es acompañar a las comunidades, para que sean estas quienes lleven adelante el proceso de desarrollo, más aun teniendo en cuenta que en muchos lugares los problemas exceden lo tecnológico – productivo.

Desde el **Programa Federal de Extensión Rural (Profeder)**, se aplica una serie de Programas de alcance nacional que buscan dar respuestas a las diversas necesidades y demandas de los distintos segmentos de la AF. Con los Proyectos Minifundio, dirigidos a la AF de subsistencia, se apunta a promover y fortalecer la organización de las familias campesinas y la satisfacción de derechos fundamentales,; los Proyectos ProFam buscan apuntalar la competitividad de los agricultores familiares, a partir de las mejoras en los sistemas de producción, la comercialización y el agregado de valor a sus producciones; los Grupos de Cambio Rural están dirigidos a grupos de productores familiares capitalizados y PyMes orientados a mejorar la gestión de la empresa familiar. Como herramientas transversales de intervención dirigidos a diferentes tipos de productores, la coordinación de extensión cuenta con los Proyectos Integrados, que se orientan a fortalecer las tramas de valor, el valor agregado en origen y la articulación de los diferentes integrantes entre sí. Por último, los Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local involucran a organizaciones e instituciones públicas y privadas, fomentando procesos de participación multiactorales, para visibilizar problemas y necesidades comunitarios con el fin de que puedan priorizarse colectivamente y consensuarse las acciones para su superación.

Entre todas estas herramientas programáticas, son **462 proyectos** funcionando actualmente, mediante los cuales se trabaja con un total de **36.806 productores** de todo el país; y **700 grupos** con **5.600 productores PyMes**.

### **Investigación y Agricultura Familiar**

Dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la puesta en marcha, en 2004, del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura familiar, dio lugar en 2005 a la creación de un Centro de Investigación (CIPAF), con cinco institutos (IPAF), uno por macrorregión.

Se trata de una **innovación institucional** en múltiples sentidos: el reconocimiento explícito del sector con el que se propone trabajar y sus heterogeneidades; los medios, metodologías y técnicas puestos en práctica; y objetivos y finalidades planteados en cuanto a las características intrínsecas del concepto político y simbólico de la AF (como fuera mencionado más arriba).

### **Enfoque territorial e Investigación Acción Participativa**

Pensar la investigación desde el enfoque de desarrollo territorial, en lugar del tradicional enfoque por cadenas o disciplinas, expresa un cambio de paradigma. Mediante esta perspectiva, se considera relevante abordar al territorio como un espacio en construcción a partir del uso y apropiación de los recursos naturales, donde se generan procesos productivos, sociales, culturales y políticos (ALBALADEJO, 2004). Para Alburquerque (1997), se incluyen la heterogeneidad y complejidad del mundo real, sus características medioambientales específicas, los actores sociales y su movilización en torno a estrategias y proyectos diversos, así como la existencia y acceso a los recursos estratégicos para el desarrollo productivo y empresarial. Al respecto, Milton Santos señala que: “El espacio es un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es desigual”. En este sentido se propone abordar el espacio como “una forma-contenido, es decir como una forma que no tiene existencia empírica y filosófica si la consideramos separadamente del contenido, y por otro lado como un contenido que no podría existir sin la forma que lo sustenta” (SANTOS, 2000, citado por INTA, 2013, p. 24). El enfoque territorial como marco epistemológico, para el abordaje de las problemáticas que afectan al trabajo y condiciones de vida de la AF, conduce a nuevas formas de investigación, desarrollo y socialización tecnológica. Es por

ello que, desde el CIPAF, se asume la investigación acción participativa (**IAP**) como marco teórico y metodológico de la intervención en territorio, con el objetivo de complementar la investigación científica tradicional, que puso al INTA entre las instituciones de vanguardia en el desarrollo tecnológico, con enfoques que integren otros aspectos de la vida social para lograr un abordaje integral de la realidad. Actualmente, potenciado por el carácter de enfoque territorial de los proyectos regionales del INTA y por la histórica coexistencia de investigadores y extensionistas en la misma institución, la IAP facilita la conformación de los grupos en los territorios, fortaleciendo el trabajo de la institución con las organizaciones locales y actores institucionales.

Si bien en Ciencias Sociales, este enfoque no es nuevo (FALS BORDA, 2013), sí lo es para instituciones dedicadas al desarrollo tecnológico como el INTA. En este organismo, el sistema de investigación predominante se vinculó a una forma de generación y transferencia de tecnología, conocido como enfoque difusionista de un tipo de tecnología, los llamados “**paquetes tecnológicos**” de la Revolución Verde, que resultó ser hegemónico en casi todo el mundo y desde hace más de medio siglo (GIORDANO; GOLSBERG, 2013).

En particular, podemos definir la IAP como

un estilo o enfoque de la investigación social que procura la participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo sobre dicha realidad y de promover la modificación de las condiciones que afectan la vida de los sectores populares (SIRVENT, 1994 citado por GIORDANO; GOLSBERG, 2013, p. 16).

Uno de los aspectos a destacar es la intencionalidad explícita en la definición de la IAP, cuya finalidad es lograr transformaciones en el ámbito organizativo. Este propósito político es central, dado que busca en el avance de su propuesta el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, donde se desnaturalice lo cotidiano de las condiciones de exclusión, marginalidad e injusticia como algo dado y en las cuales se encuentra una parte de la población de América Latina. Desde esta perspectiva, la IAP pretende empoderar a los sujetos y sus organizaciones.

La IAP busca construir conocimiento de manera científica, cuyos resultados sean comprobables y obtenidos mediante una metodología expresa,

de carácter no neutral. En el caso del investigador, su función excede lo estrictamente académico, para convertirse en un animador sociocultural que debe orientar y fortalecer el proceso, contribuyendo al diálogo y recuperando para ello el aporte del grupo. Debe poder sistematizar y organizar lo que aparece fragmentado o en forma no crítica, en clave de nuevos interrogantes que incluyan al conjunto. Para ello, desde el CIPAF y en el INTA en general, se avanzó en la incorporación de profesionales provenientes de las Ciencias Sociales (abogados, antropólogos, sociólogos, entre otros), para abordar la investigación desde la interdisciplinariedad, entendiendo que ello es una condición necesaria para afrontar los desafíos planteados en su complejidad.

### **Democratización en la toma de decisiones**

Un elemento central para la nueva institucionalidad que se pretende consolidar es el abordaje de los problemas y la toma de decisiones de una manera democrática y consensuada, a partir de la instauración de Consejos Asesores (integrados por representantes de productores, de gobiernos provinciales, de los programas de desarrollo, de universidades) y Consejos directivos de los Centros Regionales y de Investigación del INTA y sus institutos. Estos Consejos, cuyas decisiones tienen poder vinculante en el caso de los directivos, están formados por representantes de los Centros Regionales del INTA, de las organizaciones de productores, representantes de la academia y del quehacer científico. Todos ellos comprenden a 1.500 personas que ejercen el control social de la institución.

La premisa es incorporar a los diversos sectores en estos espacios; por ejemplo, en los consejos asesores de los IPAF, participan desde sus orígenes representantes de la FONAF y otros movimientos campesinos e indígenas, delegados municipales y provinciales y, últimamente, de la cámara de PyMes metalmecánicas vinculadas a la AF en las diversas regiones.

### **Tecnologías apropiadas**

En última instancia, lo que subyace a esta perspectiva de investigación es una nueva relación entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Se trabaja desde el convencimiento de que los problemas planteados se resuelven a partir tanto de los conocimientos generados por las ciencias clásicas como de aquellos que se originan en el saber empírico y popular. De esta forma, los desarrollos tecnológicos se adaptan mejor a la realidad

económica, social, cultural y política de las poblaciones con las que se trabaja y les mejora las condiciones de trabajo como en su hábitat.

La necesidad de generar tecnologías que respondan a las verdaderas demandas e intereses de los productores en el territorio constituye la finalidad del CIPAF.

Para ello, es fundamental construir redes entre todos los actores vinculados. Una estrategia para acercar las tecnologías apropiadas, sus fabricantes y las organizaciones de productores y universidades son los encuentros regionales de maquinarias y herramientas, como los parques tecnológicos localizados en unidades experimentales. De su implementación, se conformó en 2011 la **Cámara de Fabricantes de Maquinaria para la Agricultura Familiar (CAMAF)**. Hoy en día, la CAMAF agrupa a más de 110 PyMes y talleres, que fabrican más de 300 máquinas y herramientas adaptadas económica y culturalmente a las distintas realidades locales.

Desde el CIPAF, se hacen aportes para desarrollar tecnologías apropiadas a las condiciones económicas, ecológicas y sociales para los sistemas productivos de cada región del país, en función de la demanda de los productores y con aportes de varias unidades del INTA, universidades y organismos provinciales. Ejemplos de ello son: la cañera INTA, para la cosecha en verde de la caña de un surco; tecnologías de conducción, captación y distribución de agua para riego y animales en zonas áridas; la exprimidora y peladora de cítricos; la peladora y atadora de mimbres; trilladora de quinoa; intersembradoras para pequeñas parcelas; técnicas mejoradas para el hilado de fibras especiales; tecnologías agroecológicas para cultivos intensivos y extensivos; tecnologías para el uso de energías renovables, como el destilador de aguas arsenicales, el horno solar y la heladera solar, entre otros. Todo esto se llevó adelante en cooperación técnica y académica entre varias unidades del INTA con universidades y PyMes locales.

### **Integración regional y cooperación Sur – Sur**

Como mencionamos al comienzo del presente artículo, la constitución del sector de la AF representa un proceso, a nivel regional, que responde en última instancia al nuevo orden político, instaurado en muchos países del continente, y a los objetivos comunes que ellos persiguen.

En el ámbito institucional dirigido al desarrollo rural, esta integración se vio reflejada en la incorporación del INTA a la **Plataforma Tecnológica Regional en Agricultura Familiar, en el marco del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur – Procisur**, que nuclea a los INIA, institutos nacionales de investigación agropecuaria del Mercosur ampliado. La plataforma constituye un ámbito de coordinación, para articular e integrar a los diferentes actores del sistema agroalimentario y agroindustrial de la región, con el fin de promover el desarrollo tecnológico y la innovación en un área de interés común.

Asimismo, acompañando las políticas nacionales en materia de relaciones exteriores, se profundizó la integración con los países de América Latina y el Caribe, con misiones continuas a diversos países de la región. A través de la cancillería, se realizaron misiones técnicas y políticas a países de la región como Venezuela, Haití, Paraguay, Ecuador, Bolivia.

Más adelante, estos lazos se extendieron al África –Namibia, Etiopía, Costa de Marfil, Sudáfrica, Angola–, en lo que se denomina la articulación Sur–Sur. Asimismo, se realizaron: la misión del ProHuerta en Haití, que busca aportar elementos para lograr la soberanía alimentaria, el intercambio en materia de maquinaria agrícola nacional en Venezuela, la innovación en la estructura institucional del INTA en I + D + Extensión, como principal punto de interés para los países del hemisferio sur.

La reciente instalación de un laboratorio internacional en **Agrópolis**, ubicado en Montpellier, Francia, sitúa a la institución en el marco de la cooperación científica junto a instituciones europeas y americanas, con el objetivo común de estudio en el desarrollo de los territorios rurales y periurbanos.

## ALGUNAS REFLEXIONES FINALES Y DESAFÍOS ACTUALES

A partir de lo desarrollado en estas páginas, dimos cuenta de los avances institucionales en materia de políticas públicas para el desarrollo rural, en un modelo de desarrollo nacional con inclusión social. Nos enfocamos principalmente en la experiencia del INTA, como un ejemplo de innovación en este plano, que incluye como principio el desafío de actuar junto a las

organizaciones de productores familiares y su **posicionamiento como actores sociales y económicos claves en las economías locales**. Cabe por último destacar los desafíos impuestos de cara al futuro.

En primer lugar, más allá de seguir construyendo institucionalidad para el desarrollo rural, vemos la necesidad de **unificar y coordinar las distintas herramientas de política pública** para lograr mayor impacto en la intervención. Sólo de esta manera se puede superar la etapa de lo que podemos llamar “planes pilotos”, para dar el salto hacia sólidas políticas de Estado de alcance estructural. Temas tales como el acceso a los recursos naturales, o la generación de normativas adecuadas a la producción familiar, sólo pueden abordarse con éxito en la medida que se sintetizan los esfuerzos en una misma dirección.

Otra cuestión de suma importancia tiene que ver con **profundizar la democratización en la toma de decisiones**. En este sentido, un objetivo concreto es que se incorporen representantes de organizaciones de la AF en los órganos asesores y de control social. Además de la relevancia que reviste a la hora de influir en la orientación general de la institución, en términos simbólicos, esa incorporación de los representantes de la AF implicaría un reconocimiento y una visibilización para el sector que redundaría, sin dudas, en su legitimidad.

Por último, y retomando lo que hemos planteado a la hora de pensar los desafíos del actual contexto histórico, el INTA tiene capacidad, desde la perspectiva técnica y científica, para aportar a la toma de decisiones políticas por los gobiernos. Esto implica contribuir a subir los pisos del debate, desde la investigación, la comunicación y divulgación de elementos concretos de la realidad del sector.

## REFERENCIAS

- ABLIN, A. **El supermercado argentino**. Buenos Aires: MinAgri, 2012. 10 p.
- ABRAMOVAY, R. **Paradigmas del capitalismo agrario en cuestión**. Buenos Aires: INTA, 2007. 170 p.
- ALBALADEJO, C. Innovaciones discretas y reterritorialización de la actividad agropecuaria en Argentina, Brasil y Francia. In: ALBALADEJO, C.; BUSTOS CARA, R. **Desarrollo local y nuevas ruralidades en Argentina**. Bahía Blanca: UNS, 2004. p. 369-412.

ALBURQUERQUE, F. Espacio, territorio y desarrollo económico local. **Persona y sociedad**, Santiago, v. 11, n. 1, p. 23-38, 1997.

ALEMANY, C. Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA. In: THORNTON, R.; CIMADEVILLA, G. (Ed.). **La extensión rural en debate: concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur**. Buenos Aires: INTA, 2003. p. 137-171.

ARCHETTI, E. P.; STÖLEN, K. A. **Explotaciones familiares y acumulación de capital en el campo**. Buenos Aires: Siglo XXI, 1975. 229 p.

BASCO, M. . **El minifundio en Argentina**. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1978. 155 p.

BRESSER-PEREIRA, L. C. El nuevo desarrollismo y la ortodoxia convencional. **Economía UNAN**, México, DF, v. 4, n. 10, p. 7-29, 2007. Disponible en: <<http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.3.NuevoDesarrollismoYOrtodoxiaConvencional.pdf>>. Acceso en: 15 jul. 2014.

CHAYANOV, A. **La organización de la unidad campesina**. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974. 342 p.

ELVERDIN, J. H.; MAGGIO, A.; MUCHNIK, J. Procesos de localización/deslocalización de las actividades productivas: expansión sojera y retracción ganadera en Argentina. In: CONGRESO DE LA RED SIAL, 4., 2008, Mar del Plata. **Alimentación, agricultura familiar y territorio: Acta de trabajos completos**. Buenos Aires: Inta, 2008. 19 p. ALFATER 2008. Compilador Julio Elverdin.

FALS BORDA, O. **Ciencia, compromiso y cambio social**. Buenos Aires: El Colectivo, 2013. 475 p.

FONAF. Foro Nacional de Agricultura Familiar. **Lineamientos generales de políticas públicas orientadas a la elaboración de un plan estratégico para la agricultura familiar**: aprobado por el 2º Plenario del Foro Nacional de Agricultura familiar. Buenos Aires, 2006. 50 p.

FORNI, F. **La pobreza rural en Argentina**. Buenos Aires: Secretaría de Programación Económica, 1994. 5 p.

GIORDANO, G.; GOLSBERG, C. (Comp.). **Desarrollo tecnológico y agricultura familiar: una mirada desde la investigación acción participativa**. Buenos Aires: INTA, 2013. 62 p.

HOLLMANN, J.; ALBRIEU, J.; BARTH, I.; TORRES, G.; MAZZOLA, C. **Cambio el clima: herramienta para abordar la adaptación al cambio climático desde la extensión**. Montevideo: IICA, 2013. 111 p.

INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. **Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: total del país y provincias: resultados definitivos: variables seleccionadas, serie B nº 1**. 2011. Disponible en: <<http://www.ec.gba.gov.ar/areas/hacienda/estadistica/masc.xls>>. Acceso en: 9 out. 2014.

INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. **Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2014**. Buenos Aires, 2013. (Análisis demográfico, 36).

INTA (Argentina). **Programa Nacional de Transformaciones Territoriales, Innovación y Gestión del Desarrollo**. Buenos Aires, 2013. 48 p.

KAUTSKI, K. **La cuestión agraria**. México: Siglo XXI, 2002. 547 p.

MURMIS, M. Tipología de pequeños productores campesinos en América Latina. **Ruralia**, [Buenos Aires], v. 2, p. 29-56, 1991.

NEVES, D. P. **Agricultura familiar**: quantos ancoradouros! In: FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (Org.). **Geografia agrária**: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007. p. 211-270.

OBSCHATKO, E. S. de; BASAÑES, C. C.; MARTINI, G. D. **Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina**: diagnóstico y propuestas. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: IICA, 2011. 192 p.

OBSCHATKO, E. S. de; FOTI, M. del P.; ROMÁN, M. E. **Los pequeños productores en la República Argentina**: importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002. 2. ed. rev. e ampl. Buenos Aires: SAGyP-IICA, 2007. 127 p. (Estudios e investigaciones, 10).

PAZ, R. **El campesinado en el agro argentino**: ¿repensando el debate o un intento de reconceptualización? 2006. Disponible en: <<http://cepafoa.com/debates/revistaraulpaz.pdf>>. Acceso en: 3 jun. 2014.

ECHENIQUE, J. **Tendencias y papel de la tecnología en la agricultura familiar del Cono Sur**. Montevideo: Procisur: BID, 2000. 62 p. (Serie Documentos, 11).

RAMILO, D.; PRIVIDERA, G. (Comp.) **La agricultura familiar en Argentina**. Buenos Aires: INTA, 2013. (Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales, 20).

ROFMAN, A. **Las economías regionales**: luces y sombras de un ciclo de grandes transformaciones: 1995/2007. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación, 2012. 780 p. (Pensamiento Crítico, 6).

SOVERNA, S.; TSAKOU MAGKOS, P.; PAZ, R. **Revisando la definición de agricultura familiar**. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 2008. 18 p. (Serie Documentos de Capacitación, 7).

WOLF, E. R. **Una tipología del campesinado latinoamericano**. Buenos Aires: Nueva Visión, 1977. 100 p. (Colección Fichas, 62).

---

Recibido el 14 de julio de 2014 y aprobado el 6 de agosto de 2014